

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024



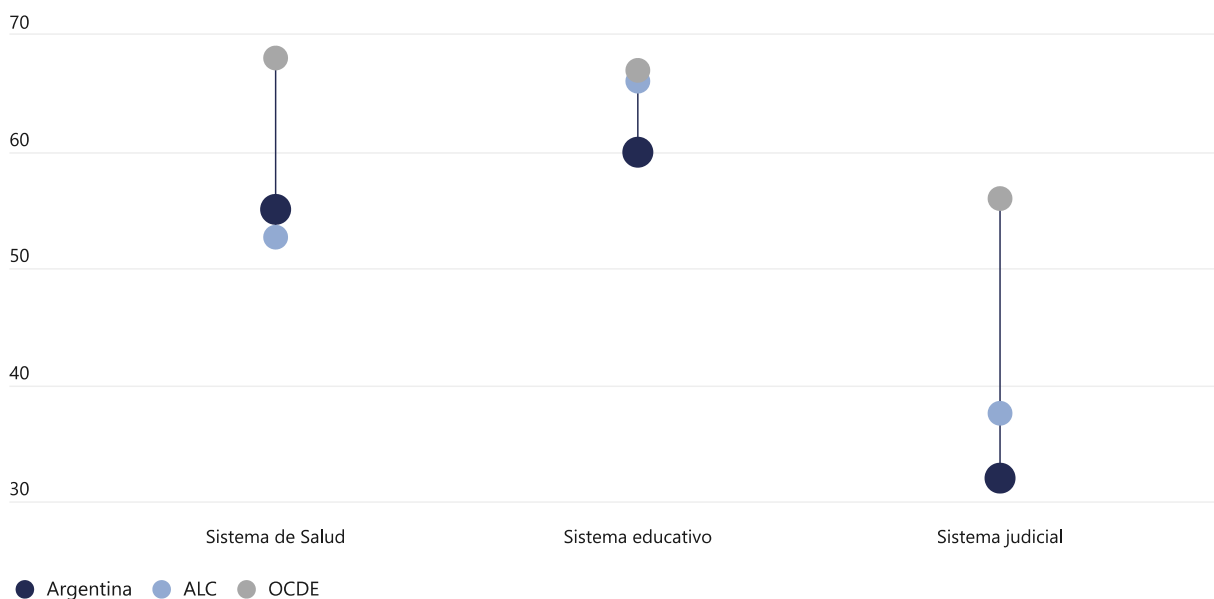
Argentina

Confianza y satisfacción con los servicios públicos

La confianza en las instituciones públicas y la satisfacción con los servicios públicos son resultados importantes de la calidad de la gobernanza pública. Reflejan la percepción que tienen los ciudadanos de la competencia del gobierno en el diseño de políticas públicas y la prestación servicios, así como sus expectativas sobre el comportamiento de las instituciones y los funcionarios públicos. La satisfacción con los servicios públicos y la confianza en las instituciones públicas, aunque no son resultados necesarios de la gobernanza democrática, pueden mejorar la eficacia de la gobernanza fomentando la participación en la vida pública, el cumplimiento de las políticas públicas y la cohesión social.

La mayoría de los argentinos están satisfechos con la educación y más de la mitad con el sistema de salud, mientras que la satisfacción con el sistema judicial está por debajo de las medias de ALC y la OCDE. En Argentina, el 60% de la población está satisfecha con el sistema educativo, un porcentaje menor que los promedios de ALC (66%) y la OCDE (67%). El sector de salud tiene un índice de satisfacción del 55%, que se alinea con el promedio de ALC (53%) pero está 13 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del promedio de la OCDE (68%). Solo el 32% de los argentinos está satisfecho con el sistema judicial, porcentaje por debajo del de ALC (38%) y significativamente inferior al promedio de la OCDE (56%).

Gráfico 1. Satisfacción con los servicios públicos, 2022



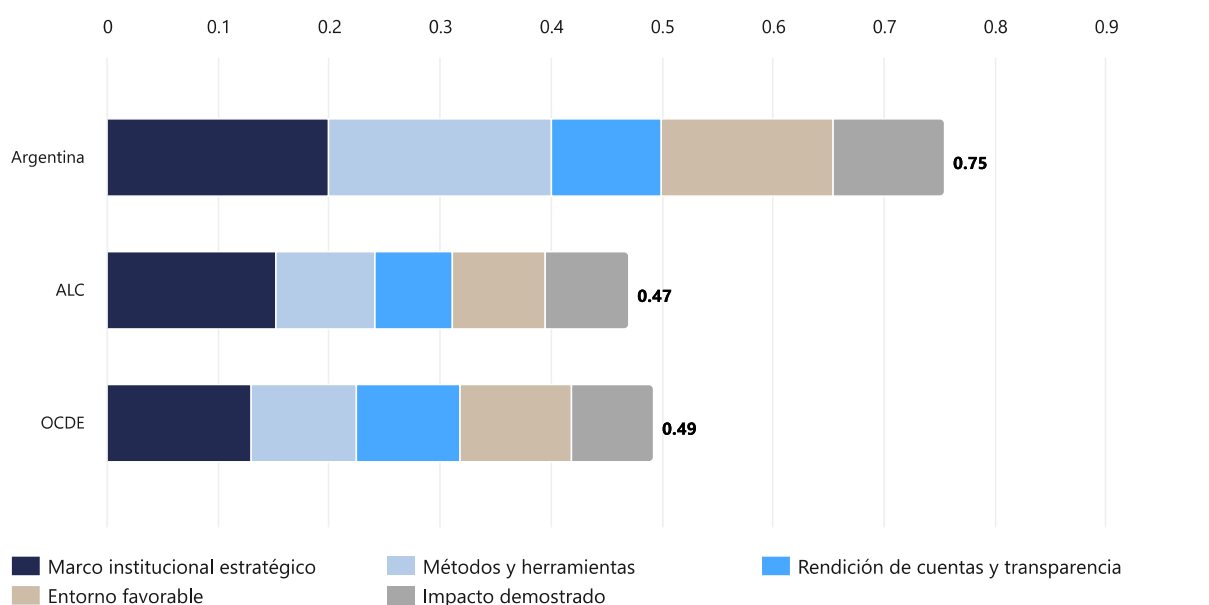
Buena gobernanza para la inclusión y la sostenibilidad

En una época de crisis múltiples, los países de América Latina y el Caribe necesitan adoptar prácticas de buena gobernanza que fomenten la inclusión y la sostenibilidad, elementos cruciales para promover la prosperidad y la resiliencia democrática. Entre las acciones clave están construir sobre las fortalezas de la democracia, incluyendo mejorar la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, así como fomentar la representación y la inclusión en la fuerza laboral pública. Además, los esfuerzos deben centrarse en reforzar las competencias clave para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, incluidos los enfoques presupuestarios y de contratación pública que apoyen la transición verde. Asimismo, la protección contra las amenazas a los valores democráticos exige que se mantengan normas eficaces de integridad pública y regulaciones sólidas contra las influencias indebidas.

Los procesos de gestión presupuestaria, como la presupuestación con perspectiva de género, pueden ayudar a promover medidas para cerrar las brechas de género. El Índice de Presupuestación con Enfoque de Género de la OCDE mide el desempeño de los países en cinco dimensiones de los mecanismos de presupuestación con enfoque de género: el marco institucional y estratégico para evaluar el impacto de género de las políticas presupuestarias y fiscales; los métodos y herramientas utilizados para implementar la presupuestación con enfoque de género; los mecanismos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; el entorno favorable para la implementación eficaz y coherente del marco presupuestario con enfoque de género; y el impacto de la presupuestación con enfoque de género en el desarrollo de políticas y las decisiones de asignación. De los 13 países de ALC encuestados, 10 practican la presupuestación con enfoque de género (77%), frente al 61% de los países de la OCDE.

Argentina tiene la puntuación más alta en el índice de presupuestación con perspectiva de género entre los países de ALC encuestados. Obtiene una puntuación de 0.75, en una escala de 0 a 1, más alta que la de ALC (0.25) y la de la OECD (0.49). Argentina obtiene la puntuación más alta posible (0.2) en marco institucional y estratégico, así como en métodos y herramientas. Hay margen de mejora en rendición de cuentas y transparencia (0.1) y en impacto (0.1).

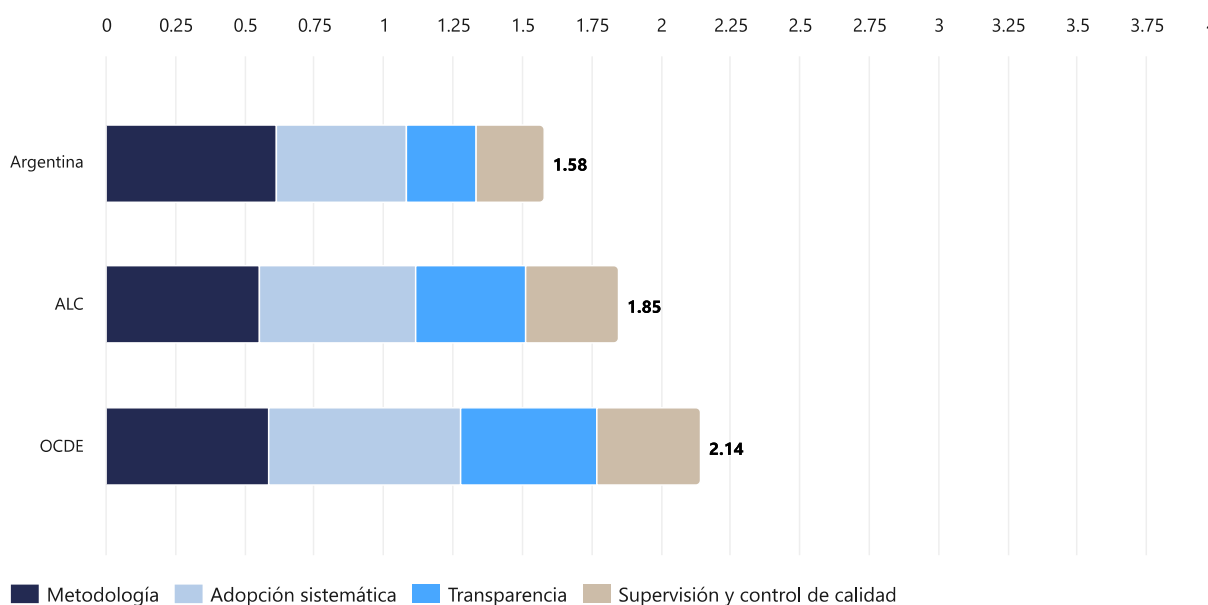
Gráfico 2. Índice de presupuestación con perspectiva de género de la OCDE, 2022



Una participación significativa de las partes interesadas en la toma de decisiones contribuye a mejorar el diseño y la aceptación pública de las políticas y los servicios públicos. El Índice de Gobernanza y Política Regulatoria (iREG) de la OCDE evalúa la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas (las aprobadas por el jefe de gobierno, los ministerios o el gabinete). Este indicador mide el desempeño de los países en involucrar sistemáticamente a las partes interesadas en la toma de decisiones públicas, el uso de herramientas, la transparencia de sus consultas y su supervisión y control de calidad. Entre 2019 y 2022, 8 de los 11 países de ALC encuestados (73%) mejoraron su puntuación iREG en participación de las partes interesadas.

Argentina se sitúa por debajo del promedio de ALC en el índice iREG de participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas. Obtiene una puntuación de 1.58, en una escala de 0 a 4, en comparación con el valor medio de 1.85 y 2.14 en los países de ALC y la OCDE, respectivamente. Su puntuación más alta corresponde a la dimensión de metodología (0.61 sobre una puntuación máxima de 1), y obtiene resultados relativamente buenos en la adopción sistemática, con una puntuación de 0.47. Aún hay margen de mejora en todas las dimensiones, especialmente en la transparencia de la participación de las partes interesadas, la supervisión y el control de calidad.

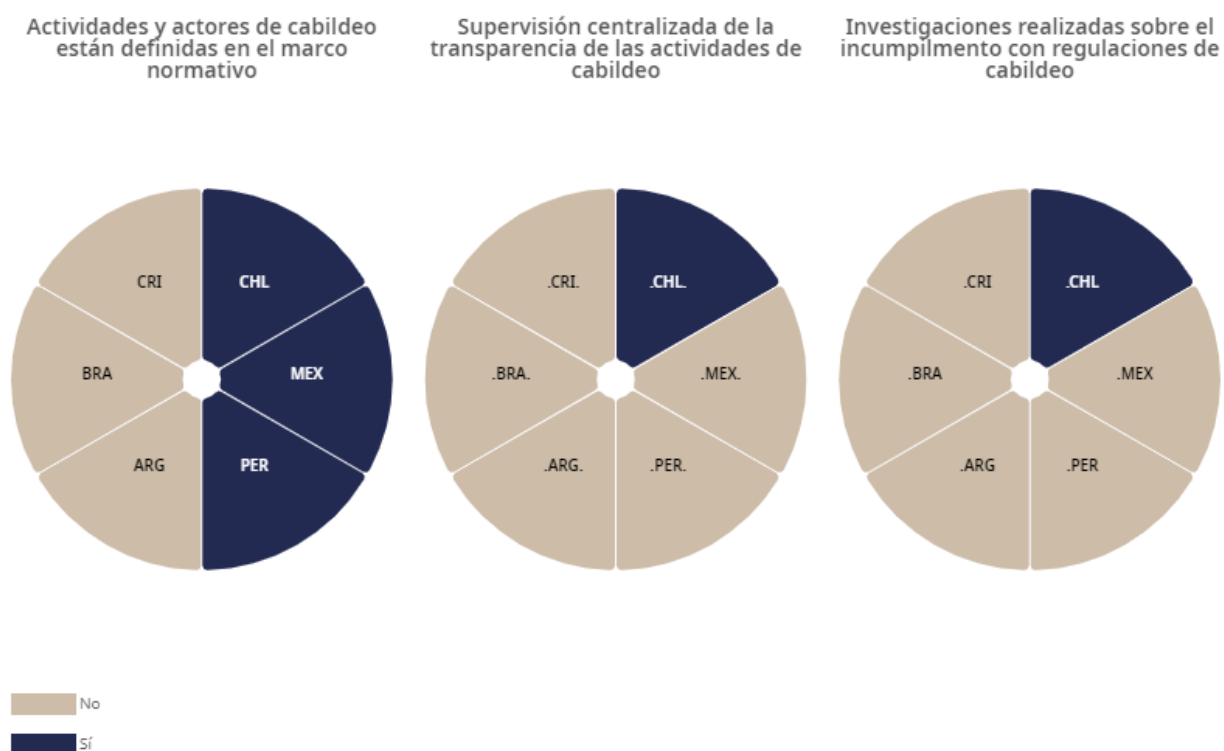
Gráfico 3. iREG sobre la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas, 2022



El cabildeo forma parte de la democracia desde hace mucho tiempo, ya que facilita la representación de una serie de intereses y ayuda a identificar el impacto que las políticas tendrán en diversos grupos. Sin embargo, las políticas públicas sufren si las prácticas de cabildeo no son transparentes o no están reguladas, lo que permite a los grupos de interés monopolizar la influencia, manipular la opinión pública, influir en las decisiones gubernamentales y, en última instancia, obstaculizar la aplicación efectiva de las políticas públicas. Para que las regulaciones sobre cabildeo sean eficaces, los gobiernos deben supervisar su cumplimiento e imponer sanciones en caso de infracción. Al año 2022, tres de los seis países de ALC encuestados (50%) regulaban el cabildeo mediante la definición de sus actividades y actores. Sin embargo, la mayoría de los países de ALC carecen de instituciones y marcos regulatorios para supervisar las prácticas de cabildeo y no investigan las infracciones.

Argentina no define las actividades de cabildeo en su marco normativo, lo que hace más difícil impedir que los grupos ejerzan una influencia indebida. Además, no cuenta con un organismo encargado de supervisar la transparencia de las actividades de cabildeo y no ha llevado a cabo ninguna investigación por incumplimiento con las regulaciones de cabildeo en el último año calendario.

Gráfico 4. Regulaciones, supervisión y sanciones sobre cabildeo



Uso y gestión de los recursos públicos

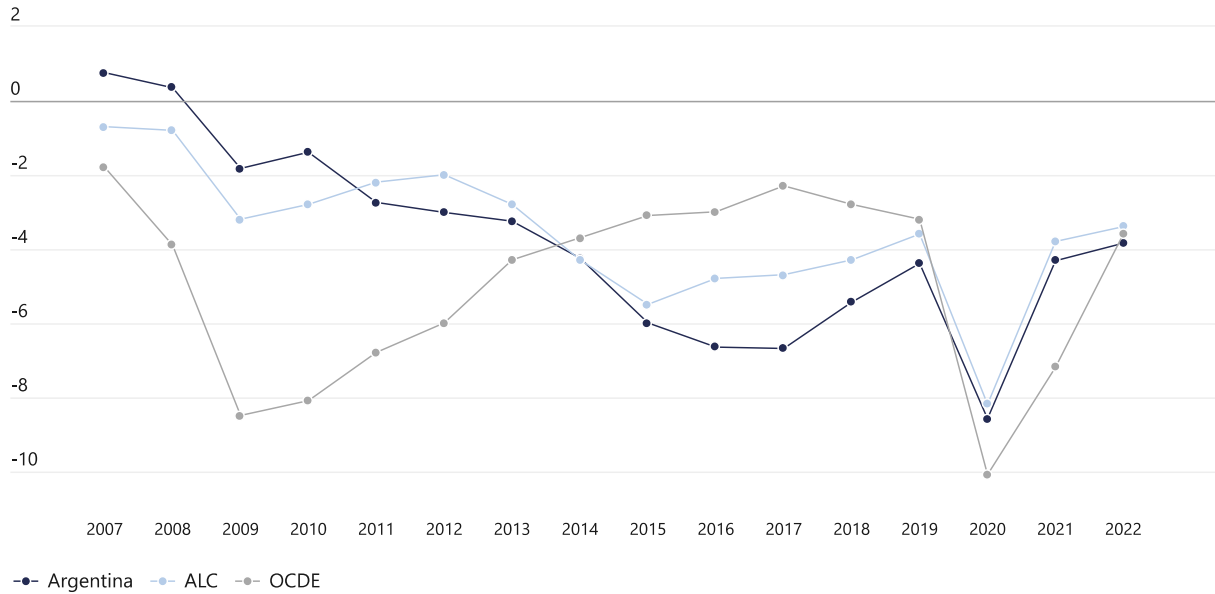
Para lograr avances significativos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible, los gobiernos deben gestionar sus recursos existentes de forma estratégica. Desde una perspectiva fiscal, esto implica equilibrar cuánto gasta y cuánto recauda el gobierno. Desde la perspectiva de los recursos humanos, significa reforzar la capacidad y las competencias de los empleados públicos y crear una fuerza laboral pública y oficiales públicos electos que representen a todas las personas a las que sirven.

Las finanzas públicas de la región de ALC muestran modestos signos positivos, tras un marcado deterioro en 2020. Este deterioro se debió a las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19, y a las medidas de apoyo a las empresas y a las personas para gestionar su impacto. Para el 2022, los balances fiscales -la diferencia entre los ingresos y los gastos de un gobierno en un año- ya se habían recuperado ampliamente a los niveles anteriores a la COVID en toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo frágil.

En 2022, Argentina tuvo un déficit fiscal del 3.9% del PIB, mayor que el promedio de los países de ALC (3.4%), pero que se redujo del 4.4% en 2019. Los ingresos del gobierno representaron el 33.4% del PIB de Argentina en 2022, en comparación con el 31.5% en promedio en los países de ALC y el 39.7% en los

países de la OCDE. Esta proporción de ingresos en relación con el PIB se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2019.

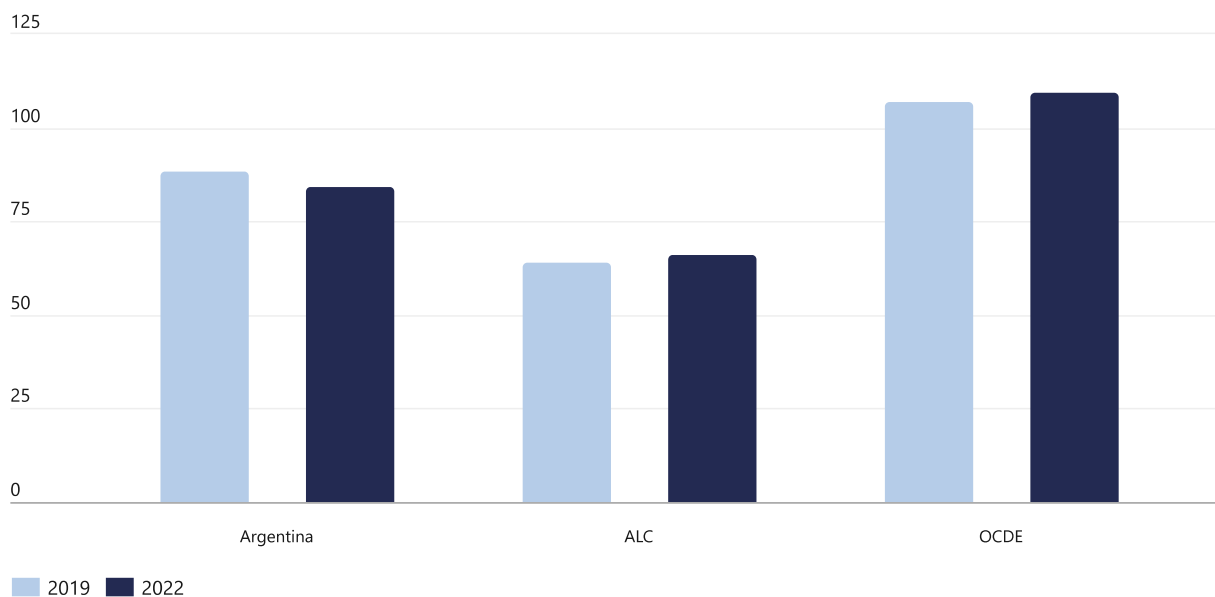
Gráfico 5. Balance fiscal de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2007 - 2022



La deuda pública puede utilizarse para financiar tanto el gasto corriente como las inversiones, pero tiene un costo en forma de pago de intereses. La deuda como porcentaje del PIB aumentó durante la pandemia de COVID-19 en la región de ALC debido al aumento del gasto y a la pérdida de ingresos fiscales, y en 2022 aún se mantenía 2 p.p. por encima de su nivel de 2019.

En 2022, la deuda pública de Argentina ascendía al 84.7% de su PIB, por encima de la media de ALC del 66.3%. Su nivel de deuda se ha reducido desde el 88.8% de 2019.

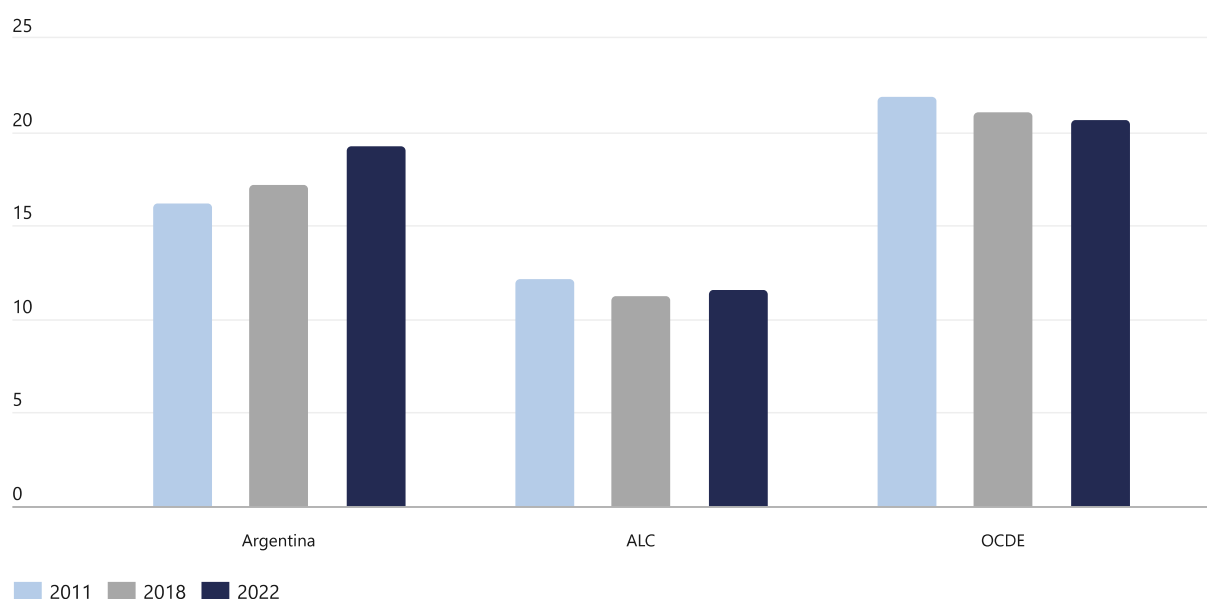
Gráfico 6. Deuda bruta de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2019 y 2022



Los empleados públicos están al frente del diseño y la formulación de políticas públicas y de la prestación de servicios públicos. La proporción del empleo público varía considerablemente en la región de ALC, desde menos del 5% del empleo total hasta más del 20%.

En 2022, el empleo público en Argentina ascendió al 19% del empleo total, por encima del promedio de ALC del 12%, y ligeramente por debajo del promedio de la OCDE del 21%. El empleo público en Argentina ha aumentado desde el 17% del 2018.

Gráfico 7. Empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011, 2018 y 2022



Notas para los gráficos

Los datos sobre finanzas públicas y economía proceden de la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) del FMI (octubre de 2023), que se basa en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) y se extrajeron el 3 de noviembre de 2023. Para los promedios de la OCDE, los datos se basaron en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y se extrajeron de la base de datos en línea Panorama de las Administraciones Públicas, que representa la última actualización disponible: 5 de enero de 2024.

El balance fiscal, también denominado capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las Administraciones Públicas, se calcula como el total de ingresos públicos menos el total de gastos públicos.

Los datos sobre empleo público proceden de la base de datos ILOSTAT de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se extrajeron el 17 de febrero de 2023. Los datos se basan en la Encuesta de Población Activa. El empleo en el sector público abarca el empleo en el sector gubernamental más el empleo en empresas y sociedades residentes de propiedad pública.

Los promedios de ALC y la OCDE se refieren al promedio no ponderado, con la excepción de los indicadores de finanzas públicas.

Para más información, véase www.oecd.org/publication/government-at-a-glance-lac/2024/